

CASO RADICAL RADIO Y OTROS

v.

LA REPUBLICA DE CHIRILAGUA

ESTADO

EQUIPO #218

INDICE

II. ABREVIATURAS	3
III. BIBLIOGRAFÍA	4
DOCTRINA	4
NORMAS E INSTRUMENTOS	5
Convenciones Internacionales	5
Otros instrumentos internacionales	5
Normas internas	5
JURISPRUDENCIA	5
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Casos Contenciosos)	5
Comisión Interamericana de Derechos Humanos	7
Corte Europea de Derechos Humanos (Casos Contenciosos)	7
Opiniones Consultivas	7
IV. HECHOS	8
ANÁLISIS LEGAL DEL CASO	12
V. EXCEPCIONES PRELIMINARES	12
1. FALTA DE COMPETENCIA “ <i>RATIONE PERSONAE</i> ”	12
2. FALTA DE AGOTAMIENTO DE RECURSOS INTERNOS	14
VI. CONSIDERACIONES SOBRE LOS MERITOS DEL CASO	16
1. EL ESTADO DE CHIRILAGUA NO VIOLÓ EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESION Y LIBERTAD PERSONAL CONSAGRADO EN EL ARTICULO 13 Y 7 DE LA CADH	16
2. EL ESTADO DE CHIRILAGUA NO VULNERÓ EL DERECHO A LA PROTECCION JUDICIAL Y LAS GARANTIAS JUDICALES CONSAGRADO EN LOS ARTICULOS 8 Y 25 DE LA CADH.	27
3. EL ESTADO DE CHIRILAGUA NO VULNERÓ EL DERECHO A LA PROPIEDAD CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA CADH.	32
4. EL ESTADO DE CHIRILAGUA NO VULNERÓ EL DERECHO A LA IGUALDAD ANTE LA LEY CONTENIDO EN EL ARTICULO 24 DE LA CADH.	34
VII. PETITORIO	35

II. ABREVIATURAS

ART. Artículo

CADH, La Convención: Convención Americana de Derechos Humanos

CDH, El Comité: Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas

CIDH, La Comisión: Comisión Interamericana de Derechos Humanos

COREDH: Corte Europea de Derechos Humanos

CORIDH, La Corte, El Tribunal: Corte Interamericana de Derechos Humanos

CHIRILAGUA ó El Estado: República de Chirilagua

DADH: Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre

DDHH: Derechos Humanos

DESC: Derechos Económicos, Sociales y Culturales

DIDH: Derecho Internacional de los Derechos Humanos

DIH: Derecho Internacional Humanitario

DUDH: Declaración Universal de Derechos Humanos

LOT: Ley Orgánica de Telecomunicaciones

No: Número

OC: Opinión Consultiva

OEA: Organización de Estados Americanos

ONG: Organización No Gubernamental

ONU, UN, Naciones Unidas: Organización de Naciones Unidas

Párr. ó Párrs: Párrafo o párrafos

PIDCP: Pacto de Derechos Civiles y Políticos

RC: Reglamento de la CIDH.

SIDH: Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Sr: Señor

III. BIBLIOGRAFÍA

DOCTRINA

ACOSTA LOPEZ Juana Inés, **AMAYA VILLARREAL** Álvaro Francisco. Controversias procesales en el sistema interamericano de derechos humanos. Edit. Ibañez. Pág 93.

BARBOSA, Francisco R.. Litigio Interamericano. Perspectiva Jurídica del Sistema de Protección de Derechos Humanos. Universidad de Bogotá Jorge Tadeo lozano

CIDH. Informes Anuales. Capítulo III: Informes Relativos A Casos Individuales. 1996. Pág. 23.

EDITORIAL CEJIL, La protección de la libertad de expresión y el Sistema Interamericano., pag 38.

DEFENSORIA DEL PUEBLO DE COLOMBIA, Red de Promotores de Derechos Humanos. El derecho a la Igualdad

ENCICLOPEDIA IBEROAMERICANA DE FILOSOFIA, volumen II, El derecho y la justicia, La igualdad ante la ley, Javier de Lucas, Madrid 1996

FERRAJOLI, Luigi, Derechos y garantías, la ley del mas debil, trota, Madrid, 1999

O'DONNEL, et al. Derecho internacional de los derechos humanos, normativa, jurisprudencia y doctrina de los sistemas universal e interamericano. Bogotá. Pág. 10.

OFICINA en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Compilación de los Instrumentos Internacionales. Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Derecho penal Internacional.

OEA, Comisión Interamericana de derechos Humanos, Democracia y derechos humanos en Venezuela

RAWLS, John, Libertad, Igualdad y Derecho, Editorial Ariel, barcelona, 1980

PIETER Van Dijk, **FRIED Van Hoof**, **ARJEN Van Rijn**, **ZWAACK Leo**. Theory and pratice of the European Convention of HumanRights

NORMAS E INSTRUMENTOS

Convenciones Internacionales

- Convención Americana de Derechos Humanos.
- Convención Europea de Derechos Humanos.

Otros instrumentos internacionales

- Carta de la OEA.
- Carta de la ONU.
- Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
- Declaración Universal de Derechos Humanos.

Normas internas

- Código Penal del Estado de Chiriquí
- Ley Orgánica de Telecomunicaciones o Ley 56 de 1976

Informes

- Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 2008
- Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión
- Estudio Especial sobre el Acceso al Derecho a la Información
- Libertad de Expresión en las Américas

JURISPRUDENCIA

Corte Interamericana de Derechos Humanos (Casos Contenciosos)

- Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador. Sentencia de 24 de junio de 2005.
- Caso Acevedo Jaramillo y Otros. Sentencia De 7 De Febrero De 2006. Serie C No. 144
- Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2009. Serie C No. 202, párr. 122.
- Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela. Excepción

- Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C No. 72.
- Caso Baldeón García. Sentencia de 6 De Abril De 2006. Serie C No. 147
- Caso Bayari Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de octubre de 2008. Serie C No. 187. Pág. 15.
- Caso Castillo Petrucci vs. Perú. Sentencia de 30 de mayo del 1999.
- Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151. Pág. 19.
- Caso Escher y Otros vs. Brasil. Sentencia de 20 de Noviembre de 2009
- Caso Fairén Garbí y Solís Corrales vs Honduras, Sentencia de 15 de marzo de 1989. Serie C No. 6, párrs. 87-88
- Caso Godínez Cruz vs Honduras, Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5, párrs. 66-67
- Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, Corte Interamericana de Derechos Humanos, párr. 108
- Caso Ivcher Bronstein vs Perú. . Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, párr. 146
- Caso Kawas Fernández Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009 Serie C No. 196, párr. 110.
- Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008. Serie C No. 177, párr. 56
- Caso “La Última Tentación de Cristo“ (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73. Pág. 8.
- Caso López Álvarez Vs. Honduras. Sentencia de 1 de febrero de 2006
- Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111. pág. 7-10, 12-13, 19-21.
- Caso Ríos y otros vs Venezuela, párr. 37. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 194
- Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135. pág. 19, 21 y 26.
- Caso Perozo y otros vs Venezuela, párr. 117. Sentencia del 28 de enero de 2009
- Caso Tribunal Constitucional Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71, párr. 90
- Caso Tristán Donoso vs Panamá, párr. 110 Serie C No. 76
- Caso Uson Ramírez Vs. Venezuela, párr. 129. Sentencia de 20 de Noviembre de 2009 . Serie C No. 151. Pág. 19.
- Caso Velásquez Rodríguez vs Honduras, párr. 63-64; Sentencia de 21 de julio de 1989

- Caso Ximenes Lopes vs. Brasil. Fondo, Reparaciones y Costas y Sentencia de 4 de Julio de 2006.
- Caso Yvon Neptune Vs. Haití. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de mayo de 2008.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

- Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe N° 106/99. Párr. 13
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe N° 47/97 del 16 de octubre de 1997, Paraguay, Informe Anual 1997. Párr. 24;
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos, , Caso Mevopal S.A. Párr. 9.
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe N° 106/99. Párr. 15.
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe N° 103/99.
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe N° 10/91, Caso 10.169, Perú, Informe Anual 1990-1991.
- Comisión Interamericana de derechos Humanos, Informe N° 94/08 Caso Aldo Zucolillo Moscarda, , Párr. 38

Corte Europea de Derechos Humanos (Casos Contenciosos)

- Corte Europea de derechos Humanos. Cases of de Wilde, Ooms and Versyp ("vagrancy") v. Belgium.
- Corte Europea de derechos Humanos, Caso Nilsen contra Noruega, n° 23.118/93, párr. 43
- Corte Europea de Derechos Humanos, Caso de Pabla KY v. Finlandia, 26 de Junio de 2004, párr. 27
- Corte Europea de Derechos Humanos, Caso de Morris V Reino Unido 26 de febrero de 2002, párr. 58.

Opiniones Consultivas

- La Colegiación Obligatoria de Periodistas (arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, párr. 30.
- Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987.
- Opinion Consultiva No. 9/87, párr. 27-28

IV. HECHOS

1. Chirilagua se erigió como Estado autónomo a inicios del siglo XIX. Desde entonces, ha contado con una democracia estable, en la que tradicionalmente dos partidos políticos se han alternado el poder: el Partido Chirilaguense Popular (PCP) y el Partido por la Renovación Democrática de Chirilagua (RDC). Históricamente los poderes legislativo y ejecutivo se han renovado cada cuatro años a través de elección popular. Chirilagua participó de la negociación de la Carta de la OEA en 1948, ha ratificado todos los tratados interamericanos de derechos humanos y es parte de los principales tratados de derechos humanos de la ONU.

2. El PCP propuso que en las elecciones generales para Diputados Federales de 2008 se permitiera el escrutinio de una consulta popular denominada “la Papeleta de la democracia”. Dos meses antes de las elecciones, un grupo de estudiantes convocó a una marcha nacional e internacional en contra de la iniciativa de la Papeleta de la Democracia, a través de un grupo conformado en la red social *Facebook*. El grupo creció rápidamente en seguidores y su mensaje empezó a expandirse a través de otras redes sociales como *Twitter* y *MySpace*, así como en distintas cadenas de radio, entre las que se encontraban “Radical Radio” en la ciudad de Cedulópolis y “Radio Su-Versión” de la ciudad de Cambacrópolis, capital del Estado de Gorgia.

3. Radio Cadena Básica, una de las emisoras que transmitió el “Facebookazo”, inició transmisiones en frecuencia modulada en abril de 1965. Fue fundada en Cedulópolis por Byron Dayle y María Luisa Peroni. En el año 2000, María Luisa Peroni falleció, ante lo cual su hija, Melanie Pereira Peroni, la sucedió en sus roles de accionista y directora de la emisora. En junio de 2001, Melanie Pereira acudió a la Comisión Federal de Regulación de Telecomunicaciones (COFERETEL) solicitando la aprobación del cambio de nombre de la emisora por el de *Radical Radio*. La COFERETEL envió una comunicación oficial en la cual dio el visto bueno para el cambio de denominación, pero advirtió que en los registros aparecía una inconsistencia en cuanto a los nombres de los titulares de la concesión y de la representante legal de la emisora.

4. La franja de mayor audiencia de Radical Radio corresponde a un programa conducido por William Garra. El personaje más polémico del programa es “Fatilio Estafante”, una caricaturización del presidente de la república, quien en el programa es constantemente ridiculizado y señalado como un “señorito feudal, bueno para nada, insensible, voraz y corrupto”.

Algunos sectores de opinión han acusado al programa de ser un espacio que promueve el odio entre clases y los conflictos sociales por la disputa de tierra.

5. En uno de los programas, en los que la emisora promovía la iniciativa del “facebookazo”, a pocos días de la realización de la misma, el tema del día se concentró en los grupos de la red social Facebook que hacían referencia al Presidente Escalante. Dichos grupos eran de naturaleza distinta al de la marcha y, en general, tenían un contenido agresivo y crítico del Presidente¹. Distintos oyentes llamaron a la estación demostrando al aire su acuerdo con el contenido de los grupos e hicieron airados ataques al presidente y a sus políticas. El programa cerró con una invitación a participar en la marcha del 3 de marzo y a llevar bolsas con tierra para lanzar puñados en la plaza pública con letreros como “acá está la tierra que te falta, ahora devuélvenos nuestros derechos”.

6. El 3 de marzo de 2008, el Facebookazo se llevó a cabo en varias ciudades del país, William Garra estuvo reportando los sucesos de la marcha. Desde el inicio de la transmisión William Garra adujo que los ciudadanos tenían derechos que no estaban siendo respetados y alentó a la gente a “defender sus derechos a toda costa contra la avanzada autoritaria de la oligarquía terrateniente”.

7. ACOSINTI, es una organización social de comunidades de las municipalidades de Cambacrópolis y San Pedro de los Aguados. La asociación ha participado en dos convocatorias realizadas por la COFERETEL desde la aprobación de la ley de radiodifusión de 1976, sin embargo en ninguna de las oportunidades anteriores, la propuesta fue aprobada. Como consecuencia de ello, en junio de 1996, ACOSINTI votó en su asamblea general adoptar “medidas políticas de satisfacción de sus derechos”, que consistían en la compra de equipos de repetición y el inicio de transmisiones radiales. En esa misma fecha se decidió el nombramiento de Francis Hoffman como encargado de los proyectos de comunicaciones, iniciando las transmisiones a partir de agosto de 1996. La Emisora Radio Su Versión realizó un convenio de cooperación con Radical Radio, en virtud del cual, retransmite eventos importantes, así en San Pedro de

¹ Los grupos más radicales a los que se hizo referencia incluían, entre otros, los siguientes: “Apuesto a que encuentro un millón de personas que odian al burgués de Atilio Escalante Norris”, “Los que odiamos, repudiamos y aborrecemos a Atilio Escalante Norris”, “Muerte política a Atilio Escalante Norris”, “Yo también quiero que se muera Atilio Escalante Norris y todos los terratenientes que nos han explotado”, “Los ke kieren chingar al señorito Atilio Escalante Norris”, “la marcha es una bomba dirigible a Atilio Escalante Norris”, “¿Qué porcentaje de chirilaguenses patearía a Atilio Escalante Norris si se lo encontrara?” “¿Cómo darle en la madre al ricachón insensible de Atilio Escalante Norris?”.

los Aguados se transmitió la información sobre las opiniones del gobierno y sobre las marchas gubernamentales, lo cual enardeció a los participantes del Facebookazo, enfrentándose estos a la Policía, con palos y piedras resultando cinco civiles, un policía fallecido y cinco oficiales heridos.

8. El 5 de marzo de 2008, la COFERETEL inició como medida preliminar para la formulación de una política para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al espectro electromagnético y el pluralismo informativo, una revisión de las concesiones de radio y televisión vigentes a la fecha. El 6 de abril de 2008, la COFERETEL dispuso el cierre de las concesiones otorgadas a 40 emisoras de radio de las cuales se encontró que no cumplían los requisitos de funcionamiento dispuestos por la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (en adelante LOT), ordenándose el cese inmediato de comunicaciones a las referidas emisoras. Radical Radio fue una de las emisoras a la que les fue cancelada la concesión. El motivo para dicha cancelación era el incumplimiento de lo dispuesto por el artículo 92 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Así mismo, la COFERETEL ordenó el cierre inmediato de todas las emisoras ilegales conocidas en el país, dentro de las cuales se encontraba Radio Su Versión.

9. Como consecuencia de lo anterior, el 10 de abril de 2008, Byron Dayle en su calidad de representante legal de Radical Radio presentó una demanda ante el juez competente solicitando se declarara la nulidad de la decisión administrativa que decretó la cancelación de la concesión otorgada a la emisora. El 15 de agosto de 2008, la demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo, el cual dió traslado a la COFERETEL, actualmente el proceso contencioso administrativo se encuentra en la etapa probatoria. De igual forma, El 30 de abril de 2008, Byron Dayle y Melanie Pereira presentaron una acción de constitucionalidad, alegando que la cancelación de la concesión otorgada a la emisora Radical Radio vulneraba su derecho al debido proceso, su libertad de expresión, opinión y empresa, el 15 de mayo de 2008, el juez de segunda instancia denegó la acción de constitucionalidad ya que la cancelación de la licencia se realizó en cumplimiento de la ley y que el Tribunal no observaba alguna vulneración evidente de debido proceso.

10. La decisión fue apelada y confirmada por la Corte Primera de Apelaciones de Cedralópolis. Francis Hoffman, en su calidad de representante legal de Radio Su-Versión, el 5 de mayo de 2008, presentó una acción de constitucionalidad en contra de la COFERETEL alegando que el cierre de la emisora vulneraba los derechos a la libertad de expresión e información, propiedad, y debido proceso administrativo, por violación a la

confianza legítima. El tribunal de primera instancia denegó la acción tras considerar que la actuación de la administración se había sujetado a la LOT. Posteriormente, el accionante interpuso un recurso de apelación pero la decisión fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones de Gorgia, el 15 de junio de 2008.

11. El Ministerio Público imputó a más de 30 personas, con base en información suministrada por COFERETEL. Así, el 14 de julio de 2008, se acusó formalmente a Melanie Pereira Peroni y Francis Hoffman por el delito de hurto de bienes del Estado ante el Primer Juzgado Criminal de Delitos Federales. El 8 de noviembre de 2008, el Primer Juzgado condenó como responsables de la comisión del delito de hurto de bienes del Estado a Melanie Pereira Peroni y Francis Hoffman. La sentencia fue apelada por los condenados, y fue reiterada en todos sus extremos por el Tribunal Criminal de Apelaciones el 25 de noviembre de 2008. Pereira y Hoffman fueron igualmente acusados ante el juez de conocimiento por el Ministerio Público el 20 de julio de 2008, por los delitos de instigación a delinquir y difamación en perjuicio del Presidente de la república. Mediante resolución del 15 de septiembre de 2008, el Tercer Juzgado Criminal de Delitos Federales los encontró responsables de la comisión de los mismos. Hoffman y Pereira apelaron la decisión, la cual fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones correspondiente el 1 de octubre de 2008. El 25 de julio de 2008, la oficina del Ministerio Público acusó formalmente a William Garra por los delitos de instigación a delinquir, difamación, y homicidio. El 23 de noviembre de 2008, el Tercer Juzgado Criminal de Delitos Federales condenó a William Garra por su responsabilidad en los delitos de instigación a delinquir, difamación, y homicidio. La sentencia fue apelada en término por los abogados del procesado. El Tribunal federal de Apelaciones confirmó la condena mediante sentencia de 1 de diciembre de 2008.

12. La Federación Interamericana de Medios por la Democracia, el 2 de Diciembre de 2008 presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alegando la presunta violación de los derechos contenidos en los artículos 7, 8, 13, 21, 24 y 25, todos ellos en relación con la obligación de respeto y garantía del artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en perjuicio de Radical Radio y Radio Su-Versión, así como de la señora Melanie Pereira Peroni y de los señores Francis Hoffman, William Garra.

13. El 15 de diciembre de 2008, la Comisión dio trámite a la petición y trasladó al Estado sus partes pertinentes, otorgándole dos meses para presentar su respuesta. El Estado el 15 de Enero de 2008, planteó las excepciones correspondientes a las que había lugar, posteriormente la CIDH adoptó un informe conforme al artículo 37.3 de su reglamento, mediante el cual declaró admisible el caso y encontró violaciones a los artículos 8, 13 y 25 de la Convención Americana, todos en relación

con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Melanie Pereira Peroni, Byron Dayle, Francis Hoffman y William Garra. El caso fue sometido ante la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 25 de diciembre de 2009, alegando la violación de los mismos artículos establecidos en el informe de fondo de la CIDH. Por su parte, los representantes de las víctimas allegaron a la Corte su memorial de solicitudes, argumentos y pruebas en el cual, con base en los hechos relatados por la CIDH en su demanda, reiteraron que en el caso ante la Corte debía tenerse como presuntas víctimas a las emisoras Radical Radio y Radio Su-Versión.

ANÁLISIS LEGAL DEL CASO

V. EXCEPCIONES PRELIMINARES

1. FALTA DE COMPETENCIA “*RATIONE PERSONAE*”.

14. El factor de competencia *Ratione Personae* tal como lo ha analizado la Comisión² y la doctrina comprende dos dimensiones, una legitimación por activa y una legitimación por pasiva. De tal forma que la ausencia de una de ellas, provoca la incompetencia para conocer de la petición, en razón de la persona³.

15. En cuanto a la legitimación por activa o *legitimatío ad causam*, que se refiere a la capacidad del sujeto procesal para activar el órgano internacional, se debe distinguir aquella que se refiere a los sujetos que presentan las peticiones o comunicados (peticionarios) y la que se refiere a la persona que se presenta como presunta víctima⁴. El artículo 26 del Reglamento de la Comisión, correlativo al artículo 44 de la Convención, establece que el peticionario puede presentar a la Comisión una petición "en su propio nombre" (confundiéndose en este caso con la persona de la víctima) o "en el de terceras personas" como un tercero con respecto a la víctima y sin que sea necesario tener con ésta relación personal de ningún tipo⁵. La legitimación activa está radicada en cualquier persona, independiente de que sea esta quien se considere afectada en sus derechos humanos⁶ y se encuentra regulada en el art. 44 de la CADH.

16. Sin embargo, tratándose de la víctima de cualquiera de las violaciones de derechos contenidos en la Convención plasmados en una denuncia, la regulación normativa es diferente teniendo como base el texto del Preámbulo de la

² Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe N° 106/99. Párr. 13; Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe N° 47/97 del 16 de octubre de 1997, Paraguay, Informe Anual 1997. Párr. 24; Informe Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Caso Mevopal S.A. Párr. 9.

³ Controversias procesales en el sistema interamericano de derechos humanos. Juana Inés Acosta-López, Álvaro Francisco Amaya-Villareal. Edit. Ibañez. Pág. 93.

⁴ Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe N° 106/99. Párr. 15.

⁵ Ibid. Informe N° 106/99. Párr. 15.

⁶ Ibid. Controversias procesales en el sistema interamericano de derechos humanos. Pág. 93

Convención, el cual reconoce que los derechos esenciales del hombre “tienen como fundamento los atributos de la persona humana”, la necesidad de crear condiciones que permitan a cada persona “realizar el ideal de ser humano libre, exento del temor y la miseria”⁷, y lo dispuesto en el art. 1 de la Convención, el cual consagra:

I. [...] 2. Para los efectos de esta Convención, *persona es todo ser humano*. (Cursiva fuera del texto original)

17. De lo anterior se colige, que tratándose de la víctima de una petición ante el Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos la protección se limita a “todo ser Humano”. La Convención Interamericana otorga su protección a las personas físicas o naturales, excluyendo de su ámbito de aplicación a las **personas jurídicas o ideales**, por cuanto éstas son ficciones jurídicas sin existencia real en el orden material⁸. La reiterada doctrina y práctica de la Comisión en casos como Bernard Merens y Familia⁹, Bendeck-Cohdinsa¹⁰, Banco del Perú¹¹, Caso Tabacalera Boquerón¹² y Caso Mevopal S.A.¹³ y la jurisprudencia de la Corte en casos como Cantos Vs Argentina, ratifican lo anterior.

18. En cuanto a la legitimación por pasiva, esta se refiere a la competencia del “denunciado”, es decir si se trata de un Estado parte de la Convención en contra del cual se puedan formular peticiones individuales¹⁴.

19. En el presente caso la Federación Interamericana de Medios por la Democracia, la cual está legitimada para presentar peticiones ante la CIDH conforme a lo dispuesto en el art. 44, interpuso el 2 de Diciembre de 2008 una denuncia ante la Comisión, alegando la presunta violación de los derechos contenidos en los artículos 7, 8, 13, 21, 24 y 25, todos ellos en relación con la obligación de respeto y garantía del artículo 1.1. de la Convención Americana de Derechos, en perjuicio de Radical Radio, Radio Su Versión, la Sra. Melanie Pereira Peroni y los Señores Francis Hoffman y William Garra¹⁵.

20. Si bien Chirilagua es un Estado parte de la Convención, legitimándose como sujeto pasivo de una denuncia ante el SIDH, no se configura en el caso sub judice la legitimación por activa, en virtud de que está suficientemente claro que Radical Radio y Radio Su versión no pueden ser víctimas de una violación de los derechos consagrados en la Convención ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, atendida su naturaleza jurídica. Por lo anterior, el Estado solicita a la

⁷ Informe Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Caso Mevopal S.A. Párr. 17

⁸ Ibid., caso Mevopal S.A. párr. 17; Ibid. Informe 106/99. Párr. 17.

⁹ Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe N°103/99.

¹⁰ Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe N° 106/99.

¹¹ Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe N° 10/91, Caso 10.169, Perú, Informe Anual 1990-1991.

¹² Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe N° 47/97 del 16 de octubre de 1997, Paraguay, Informe Anual 1997.

¹³ Ibid. caso Mevopal S.A.

¹⁴ Ibid., Controversias procesales en el sistema interamericano de derechos humanos. Pág. 96.

¹⁵ Caso hipotético. Párr. 40.

Corte declararse incompetente para conocer de este caso por razón de la persona, respecto de Radical Radio y Radio Su Versión. No hacerlo implicaría un desconocimiento de lo dispuesto en el art. 1(2) de la Convención Americana y el art. 47(c) del mismo instrumento.

2. FALTA DE AGOTAMIENTO DE RECURSOS INTERNOS

21. El artículo 46 de la Convención Americana prevé que para que un caso sea admisible debe haberse "interpuesto y agotado los recursos de la jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos", este es un requisito establecido para garantizar al Estado la posibilidad de resolver controversias dentro de su propio marco jurídico¹⁶, ya que la naturaleza del Sistema Interamericano es coadyuvante, subsidiario y complementario de la protección que debe ofrecer el Derecho Interno de los Estados partes¹⁷. De tal forma que se acude a este solo después que el Estado haya contado con la posibilidad de remediar el agravio con sus propios medios¹⁸.

22. La exigencia del previo agotamiento de los recursos internos se refiere a aquellos recursos judiciales, ordinarios. La Corte ha expresado a lo largo de todo el desarrollo de su jurisprudencia que tal recurso debe ser adecuado, idóneo y efectivo. En palabras de la CORIDH, que un recurso sea adecuado significa que "sea idóneo para proteger la situación jurídica infringida. . ."¹⁹, y que el mismo sea eficaz, significa que debe ser capaz de producir el resultado para

El Estado de Chirilagua prevé dentro de su jurisdicción interna, múltiples recursos y acciones judiciales que permiten garantizar a los ciudadanos la efectiva protección a los derechos humanos²⁰, sin embargo es importante señalar que para acceder a la competencia de la jurisdicción internacional, el individuo debe agotar internamente el recurso efectivo e idóneo, que le permita amparar el derecho que le está siendo vulnerado, puesto que en todos los ordenamientos jurídicos internos no siendo Chirilagua la excepción, existen múltiples recursos, pero no todos son aplicables en todas las circunstancias²¹.

23. En el presente caso los Señores Francis Hoffman y William Garra alegan ante este Tribunal la presunta violación de los derechos contenidos en los artículos 7, 8, 13, 21, 24 y 25 de la CADH. Es menester manifestar que ninguno de ellos interpuso en nombre y derecho propio recurso alguno ante la vulneración del derecho a la propiedad (art.21 CADH); del

¹⁶ Informe Comisión Interamericana de derechos Humanos, Caso Aldo Zucolillo Moscarda, N°94/08, Párr. 38.

¹⁷ Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Ríos y otros V Venezuela, párr. 37.

¹⁸ Corte Europea de derechos Humanos. Cases of de Wilde, Ooms and Versyp ("vagrancy") v. Belgium.

¹⁹ Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez, párr. 63-64; Caso Godínez Cruz, Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5, párrs. 66-67; Caso Fairén Garbí y Solís Corrales, Sentencia de 15 de marzo de 1989. Serie C No. 6, párrs. 87-88.

²⁰ Preguntas y Respuestas aclaratorias del caso.

²¹ Ibid., Corte I.D.H., *Caso Velásquez Rodríguez*. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 64, Informe N° 94/08 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, párr. 39.

derecho a la libertad de expresión (art. 13 CADH); del derecho a la igualdad ante la ley (art. 24 CADH); y del derecho a las garantías judiciales (art.8 CADH), el cual alegan presuntamente vulnerado en los distintos procesos penales llevados a cabo en su contra. El Sr. Hoffman y el Sr. Garra nunca presentaron recurso judicial alguno encaminado a amparar tales derechos, de tal manera que cesara la vulneración y agravio que estaban padeciendo como consecuencia de la violación de los mismos.

24. Por su parte, la Sra. Melanie Pereira y el Sr. Byron Dale también presuntas víctimas ante esta instancia internacional, alegan la vulneración de los derechos 7, 8, 13, 21, 24 y 25 de la CADH. No obstante lo anterior, en relación al artículo 21 de la Convención, que consagra el derecho a la propiedad, estos nunca presentaron recurso interno alguno que tuviera como finalidad salvaguardar y tutelar el derecho en mención; así como tampoco interpusieron ante los Tribunales Nacionales el recurso que conllevara a amparar las garantías judiciales (art.8 CADH), las cuales alegan presuntamente inobservadas en los procesos penales que se desarrollaron contra ellos, por los delitos de Hurto a bienes del Estado, difamación e instigación a delinquir. Finalmente, respecto a la violación del derecho a la igualdad ante la ley (art.24 CADH), ni el Sr. Dale ni la Sra. Pereira presentaron ante la jurisdicción interna recurso judicial, encaminado a garantizar la efectiva protección de su derecho, el cual presuntamente era desconocido por las autoridades chirilaguenses.

25. El Estado respetando y siguiendo lo establecido por la Honorable Corte respecto a que el Estado que alega el no agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna tiene a su cargo el señalamiento de los recursos que debieron agotarse y la efectividad de los mismos²², procede a manifestar lo pertinente.

26. El recurso idóneo, efectivo, sencillo, rápido y expedito previsto en el ordenamiento jurídico de Chirilagua para tutelar derechos fundamentales, que debió ser agotado por todas las presuntas víctimas anteriormente mencionadas para la protección de los derechos arriba enunciados, y que sin embargo no fue interpuesto por ninguno de ellos es la acción de constitucionalidad.

27. La idoneidad de la acción de constitucionalidad se deriva de los efectos que trae consigo la declaratoria de inconstitucionalidad, toda vez que es una acción que por su naturaleza permite amparar y cautelar cualquier derecho fundamental que sea vea vulnerado o amenazado a un sujeto cualquiera que este sea, sin distinción ni discriminación alguna, conllevando ello a restablecer la situación jurídica del individuo, cesando inmediatamente el agravio y/o perjuicio.

²² Ibid., Corte I.D.H., *Caso Velásquez Rodríguez. Excepciones Preliminares*. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 1, pág. 38, párrafo 88.

28. Así mismo, la mencionada acción es la vía efectiva y adecuada por cuanto era el medio que permitía al Estado de Chirilagua reparar internamente los presuntos agravios de los cuales eran víctimas Melanie Pereira, Byron Dale, Francis Hoffman y William Garra, protegiéndoles sus derechos fundamentales, cumpliendo de esa manera el Estado, el deber de garantizar el libre y pleno ejercicio de todos los derechos reconocidos en la Convención a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción.

29. Al no presentar las presuntas víctimas el recurso interno efectivo y adecuado para la determinación de sus derechos, estos no pusieron en funcionamiento el aparato judicial estatal, por lo tanto Chirilagua no contó con la posibilidad de conocer y analizar la situación en la que se encontraban la Sra. Melanie Pereira, el Sr. Francis Hoffman, el Sr. William Garra y el Sr. Byron Dale, resultándole a este materialmente imposible proteger y restablecer los derechos que presuntamente les fueron vulnerados.

30. De todo lo anterior, queda demostrado: 1) El recurso idóneo y efectivo para tutelar los derechos fundamentales presuntamente vulnerados, estuvo y está previsto en el ordenamiento jurídico de Chirilagua; 2) El recurso siempre estuvo a disposición de las víctimas, sin embargo pese a estar disponible, nunca fue agotado en derecho y nombre propio por los que alegan ser perjudicados. Por ende y en concordancia con lo dispuesto en el art.46 N°1a) y 47 de la CADH, Chirilagua solicita a la Corte declararse incompetente para conocer de la configuración de la violación del derecho a la propiedad (art.21 CADH), derecho a la libertad de expresión (art.13 CADH), derecho a las garantías judiciales (art.8 CADH) y derecho de igualdad ante la ley (art.24 CADH) en perjuicio de William Garra y Francis Hoffman y por otra parte, derecho a la propiedad (art.21 CADH), derecho a las garantías judiciales (art.8 CADH) y derecho de igualdad ante la ley (art.24 CADH) en perjuicio de Melanie Pereira y Byron Dale.

VI. CONSIDERACIONES SOBRE LOS MERITOS DEL CASO

1. EL ESTADO DE CHIRILAGUA NO VIOLÓ EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESION Y LIBERTAD PERSONAL CONSAGRADO EN EL ARTICULO 13 Y 7 DE LA CADH

31. La Corte Interamericana en su jurisprudencia ha determinado el alcance del derecho a la libertad de expresión, manifestando que “el artículo 13 engloba dos dimensiones: la individual, que se realiza a través del derecho de expresar

pensamientos e ideas y el derecho a recibirlas, y la social, como medio de intercambio de ideas e información para la comunicación masiva entre los seres humanos, las cuales deben garantizarse simultáneamente²³.

32. Al respecto, ha indicado que la primera dimensión de la libertad de expresión “no se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios”²⁴. Con respecto a la segunda dimensión del derecho a la libertad de expresión esto es, la social, es menester señalar que la libertad de expresión es un medio para el intercambio de ideas e informaciones entre las personas; comprende su derecho a tratar de comunicar a otros sus puntos de vista, pero implica también el derecho de todos a conocer opiniones, relatos y noticias verídicas por terceros²⁵.

33. La CORIDH en su OC-5/85, analizó la estrecha relación existente entre la libertad de expresión y una sociedad democrática, estableciendo, que aquella es un elemento fundamental sobre el cual se basa la existencia de una sociedad democrática. La libertad de expresión es indispensable para la formación de la opinión pública, siendo también *conditio sine qua non* para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y en general, quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente.

34. La Corte Europea de Derechos Humanos por su parte, se ha pronunciado respecto del derecho de libertad de expresión consagrado en el art. 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, expresando que esta constituye uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática, siendo una de las condiciones básicas para su progreso y para el desarrollo propio de cada individuo²⁶.

35. Es pertinente resaltar que el Estado de Chirilagua, se ajusta a un llamado Estado Constitucional de Derecho, porque demuestra fehacientemente las características que hacen a un Estado Garante en cuanto a los deberes y obligaciones internas que le asisten, las cuales son: *Renovación de las disposiciones publicas internas*²⁷, *participación democrática y ciudadana*, y

²³ Caso Herrera Ulloa, Corte Interamericana de Derechos Humanos, párr. 108; Caso Ivcher Bronstein. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, párr. 146; Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros). Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73, párr. 64; y La Colegiación Obligatoria de Periodistas (arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, párr. 30.

²⁴ Ibid., Caso Herrera Ulloa, párr. 109; Caso Ivcher Bronstein, párr. 147; “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros), párr. 65; y La Colegiación Obligatoria de Periodistas, párr. 31.

²⁵ Ibid., Caso Herrera Ulloa, párr. 110; Caso Ivcher Bronstein, párr. 148; Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros), párr. 66; y La Colegiación Obligatoria de Periodistas, párr. 32.

²⁶ ECHR, Nilsen contra Noruega, n°23.118/93, párr. 43

²⁷ Ibid., Caso hipotético, párr. 1.

un sistema de gobierno estabilizado, situaciones jurídico-políticas que no pueden ser desconocidas por la comunidad internacional. Esto mismo implica que Chirilagua sea bien llamado un Estado de Derecho en razón a que dada la División de poderes, la legalidad de los actos de los poderes públicos, la garantía de los Derechos y libertades fundamentales y la Legalidad de las actuaciones de la Administración y Control Judicial de las mismas hacen concebir a éste como “Estado Garante y Constitucionalmente Comprometido”. Su estructuración fáctica demuestra un Estado Estructuralmente Constitucionalizado, dándosele admisibilidad a la presunción *A fortiori* que establece el Derecho Público General, la cual es traducida en que “*Se presume de legalidad las actuaciones que hacen los Estados, con diseños Constitucionales normativos y materiales*”; dando cumplimiento cabal y justificable a los Artículos 1 y 2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Gracias a esa forma de Estado, Chirilagua conoce y respeta el alcance del derecho a la libertad de expresión contenido en el art. 13 de la Convención Americana. Reconociendo además que, sin una efectiva libertad de expresión, materializada en todos sus términos, la democracia se desvanece, el pluralismo y la tolerancia empiezan a quebrantarse, los mecanismos de control y denuncia ciudadana se empiezan a tomar inoperantes y, en definitiva, se empieza a crear el campo fértil para que sistemas autoritarios se arraiguen en la sociedad²⁸. Chirilagua desde su consolidación como Estado autónomo ha gozado de una democracia estable²⁹, de lo cual se deduce la abierta posibilidad que tienen todos los ciudadanos chirilaguenses de involucrarse activamente en todos aquellos asuntos que sean de su interés, sin importar el carácter que estos tengan. El Estado no restringe arbitrariamente tal participación, cuando lo hace es por razones estrictamente legales, no siendo en vano el reconocimiento de Chirilagua como un Estado democrático.

36. En el caso *sub judice* las presuntas víctimas alegan la violación de su derecho a la libertad de expresión contenido en el artículo 13 de la Convención, desde dos enfoques, vulneración del derecho a la libertad de expresión como consecuencia del cierre de las emisoras radiales a través de las cuales se materializaba el derecho y por otro lado violación del derecho a la libertad de expresión por la imputación y condena de los delitos de difamación, instigación a delinquir y homicidio., alegando además al respecto restricción ilegal de la libertad personal vulnerándose como consecuencia de ello el art. 7 de la Convención. De tal manera, que el Estado procederá a exponer los supuestos fácticos y jurídicos que desvirtúan tales violaciones estructurándolos en cada uno de esos enfoques.

²⁸ *Ibíd.*, Caso Herrera Ulloa, párr. 116.

²⁹ *Ibíd.*, Caso Hipotético, párr. 1.

- I. Violación del derecho a la libertad de expresión en perjuicio de Byron Dale, Melanie Pereira, Francis Hoffman y William Garra, como consecuencia del cierre de las emisoras radiales Radical Radio y Radio Su Versión.

37. El 5 de marzo de 2008, la Comisión Federal de Regulación de Telecomunicaciones (COFERETEL), inició una revisión de las concesiones de radio y televisión, para la formulación de una política con el único objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al espectro electromagnético y el pluralismo informativo. Solicitando actualización de datos y requisitos a todas las cadenas de radio y televisión concesionadas por el Estado. El 6 de abril de 2008, la COFERETEL dispuso el cierre de las concesiones otorgadas a 40 emisoras de radio [21 en amplitud modulada (AM) y 19 en frecuencia modulada (FM)] porque se encontró que las mismas no cumplían los requisitos de funcionamiento dispuestos por la Ley Orgánica de Telecomunicaciones³⁰. Dentro de las concesiones canceladas se encuentra la emisora fundada por el Sr. Byron Dale y la Sra. Melanie Pereira, Radical Radio.

38. El Sr. Dale y la Sra. Pereira, fundadores de Radical Radio y el Sr. William Garra locutor, periodista e imitador de la emisora³¹, manifiestan ante este Tribunal que su derecho a la libertad de expresión fue restringido como consecuencia de la cancelación de la concesión otorgada a la emisora³². El Estado manifiesta al respecto, que no existe razón jurídica válida suficiente para alegar que Chirilagua al cancelar la concesión otorgada a Radical Radio vulneró en perjuicio de Melanie Pereira, Byron Dale y William Garra el derecho contenido en el art. 13 de la CADH. En ningún momento se restringió arbitrariamente el derecho a la libertad de expresión de Dale, Pereira y Garra por cuanto, sería totalmente absurdo continuar vigente con el pretexto de garantizar el derecho a la libertad de expresión de esas personas, una concesión sobre el espectro electromagnético otorgada a una emisora radial que no cumplía los requisitos establecidos en la ley. Si el Estado adoptó tal decisión lo hizo con total apego a la normatividad vigente en la materia, ya que existía un incumplimiento por parte de la emisora de lo dispuesto en el artículo 92 de la ley Orgánica de Telecomunicaciones³³, siendo el anterior fundamento completamente objetivo sin lugar ni espacios a discrecionalidades por parte del órgano encargado de adoptar tal decisión. La citada ley Orgánica de Telecomunicaciones es una ley aprobada conforme a la estructura jurídica de Chirilagua, no impone restricciones inaceptables e irrazonables, ni tampoco desconoce derechos contenidos en la convención. Es una ley

³⁰ Ibid., Caso hipotético, párr. 29.

³¹ Ibid., Caso hipotético, párr. 15.

³² Ibid., Caso Hipotético, párr. 35.

³³ Ibid., caso hipotético, párr. 30.

conveniente, encaminada a crear un marco de regulación, control y asignación de usos del espectro electromagnético, lo cual es aceptable dentro de las normas y principios del derecho internacional dado que se trata de un bien de carácter público, sujeto a la vigilancia y regulación por parte del Estado.

39. En cuanto al cierre de la emisora Radio Su Versión, en la cual se desempeñaba el Sr. Francis Hoffman como encargado de proyecto de telecomunicaciones, no fue una decisión arbitraria producto de una persecución política en cabeza de agentes del Estado que conllevó a la vulneración del derecho a la libertad de expresión del Sr. Hoffman, como lo alegan las presuntas víctimas. No existe prueba alguna que así lo demuestre. por el contrario es una decisión sobre la cual reposa un sustento y fundamento jurídico al interior del Estado. De manera tal, que el cierre de la misma, se enmarco en una acción legítima y jurídicamente valida dentro del Estado de Chirilagua.

40. Radio Su Versión era una emisora comunitaria que operaba y usaba de forma ilegal el espectro electromagnético de Chirilagua, ya que nunca le fue adjudicada concesión alguna sobre el mismo. Fue una emisora que comenzó a operar de esa manera desde Agosto del año 1996³⁴, como consecuencia de que no fue aprobada por la COFERETEL, ninguna de las dos propuestas presentadas por la organización ACOSINTI (fundadores de radio Su Versión), en el marco de las convocatorias realizadas, para que les fuera otorgada una concesión sobre el espectro de manera tal que operara la radio comunitaria³⁵.

41. Chirilagua es consciente de que la radiodifusión sonora comunitaria, como medio masivo de comunicación, cumple un rol fundamental en el fortalecimiento de la democracia y la participación en las pequeñas comunidades rurales o urbanas destinatarias, ya que (i) contribuye a formar redes de solidaridad entre vecinos, (ii) permite la toma de decisiones informadas acerca de los asuntos locales, (iii) promueve el desarrollo social, la convivencia pacífica, la construcción de ciudadanía y de identidades culturales y sociales, y (iv) contribuye a mejorar la provisión de otros servicios y a mejorar la calidad de vida de la población³⁶. Sin embargo, lo anterior no es excusa para alegar que la misma se puede ejercer arbitrariamente por parte de los particulares, sin control ni regulación alguna del Estado, de ahí que en materia de radiodifusión sonora, por ejemplo, el acceso al espectro este sometido a la obtención de licencias, previa la realización de un proceso licitatorio³⁷; señalando una vez más que lo anterior, no constituye una forma de control previo de aquellas prohibidas por el derecho internacional de los derechos humanos, por cuanto la finalidad de las mismas no es impedir el ejercicio del derecho sino garantizar el manejo,

³⁴ Ibid., caso hipotético, párr. 23.

³⁵ Ibid., caso hipotético, párr. 21.

³⁶ Tribunal Constitucional de Colombia, Sentencia T-460 de 2006, pág. 2.

³⁷ Ibid., Sentencia T-460 de 2006, pág. 2.

regulación y acceso a un bien de uso público de carácter limitado. En aplicación de esa normatividad y regulación legítima del Estado, La COFERETEL en ejercicio de sus funciones y con total apego a la ley, canceló Radio Su Versión y Radical Radio de entre 40 cancelaciones de concesiones a emisoras radiales en todo el país.

II. Violación del derecho a la libertad de expresión por la imputación y condena de los delitos penales de instigación a delinquir, difamación y homicidio en perjuicio de Francis Hoffman, William Garra y Melanie Pereira.

42. Los representantes de las víctimas alegan ante este tribunal que cada una de las condenas impuestas por los delitos de hurto a bienes del estado, en perjuicio de Melanie Pereira, Francis Hoffman; difamación e instigación a delinquir en perjuicio del Sr. Francis Hoffman, Melanie Pereira, William Garra; y homicidio en perjuicio de este último, constituyen medidas indirectas de restricción del derecho a la libertad de expresión contenido en el artículo 13 de la Convención, conllevando además a vulnerar en perjuicio de estos el derecho a la libertad personal consagrado en el artículo 7 del mismo instrumento.

43. Toda persona dentro de un Estado es libre de sus actos pero asimismo será responsable de estos cuando cometan delitos que encuadren dentro de los tipos penales de la legislación interna del Estado. Chirilagua garantiza el derecho a la libertad y seguridad personal³⁸ de todos sus asociados. El artículo 7.2 de la Convención establece que “nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas”; es decir que únicamente puede afectarse el derecho a la libertad personal a través de una ley³⁹, pero esta ley forzosamente debe ir acompañada del principio de tipicidad “que obliga a los Estados a establecer, tan concretamente como sea posible y “de antemano”, las “causas” y “condiciones” de la privación de la libertad física”⁴⁰.

44. El Estado manifiesta que el Ministerio Público de Chirilagua acusó a Melanie Pereira, Francis Hoffman y William Garra debidamente y conforme a las leyes penales existentes en el ordenamiento jurídico interno, ajustándose éstas a los

³⁸ Así también lo ha entendido el Tribunal Europeo, cuando consideró que “las palabras libertad y seguridad [...] se refieren a la libertad y seguridad físicas”. Cfr: *ECHR, Case of Engel and others v. The Netherlands*, Judgment of 8 June 1976, Applications Nos. 5100/71; 5101/71; 5102/71; 5354/72; 5370/72, para. 57. Traducción de la Secretaría de la Corte. El texto original en inglés es el siguiente: “[I]n proclaiming the “right to liberty”, paragraph 1 of Article 5 (art. 5-1) is contemplating individual liberty in its classic sense, that is to say the physical liberty of the person”.

³⁹ *La Expresión “Leyes” en el Artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos*. Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6, párr. 38. “norma jurídica de carácter general, ceñida al bien común, emanada de los órganos legislativos constitucionalmente previstos y democráticamente elegidos, y elaborada según el procedimiento establecido por las constituciones de los Estados Partes para la formación de las leyes”

⁴⁰ Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Itiguez Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia 21 de Noviembre de 2007. Serie C. No. 170, Par 57

estándares internacionales en materia de derechos humanos tal como se evidenciará en la argumentación que a continuación plantea el Estado.

45. En cuanto al delito de “hurto de bienes del Estado”, es menester manifestar que este se imputó al Sr. Francis Hoffman y la Sra. Melanie Pereira, con fundamento en la apropiación y usufructo ilícito del espectro radioeléctrico de la nación. Al no cumplir la emisora Radical Radio lo dispuesto en el art. 92 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, y no reunir así los requisitos establecidos en la ley para acceder y gozar de forma legítima el espectro radioeléctrico, se entiende que está usufructuó ilícitamente el mismo. Melanie Pereira en calidad de representante legal y directora de la emisora es responsable ante las autoridades estatales por la comisión de tal conducta. En cuanto a Francis Hoffman encargado de las comunicaciones de radio Su Versión, en calidad de tal es responsable del delito en mención ya que la emisora, inició transmisiones radiales sin haber obtenido licencia para usar el espectro radioeléctrico del Estado. Es de anotar que a diferencia de otros países de la Región, Chirilagua dispone de una ley que regula lo concerniente al acceso del espectro radioeléctrico de las radios comunitarias. ACOSINTI propietaria de Radio Su Versión participó en dos convocatorias de la COFERETEL para que les fuera asignada concesión, sin embargo, en ninguna de las anteriores oportunidades la propuesta fue aprobada por lo que nunca les fue adjudicada licencia por parte del estado para usar el espectro radioeléctrico, resultando de esa manera ilícito cualquier uso que estos hubieren hecho del mismo.

46. Respecto al delito de instigación a delinquir,⁴¹ el Estado manifiesta que sí existieron conductas enmarcadas dentro del tipo penal que conllevaron a la imposición de la correspondiente sanción por parte del Estado. Las dos emisoras representadas legalmente por Melanie Pereira y Francis Hoffman, en sus emisiones radiales las cuales estuvieron enlazadas, incitaron a perturbar la paz y el orden público alardeándole a los oyentes con expresiones tales como “tenemos pruebas de que se cometerán fraudes para perpetuar al presidente en el poder y con él, las inequidades históricas y los largos años de abuso y exclusión⁴²” y “defiendan sus derechos a **toda costa**”⁴³. William Garra por su parte, constantemente enardeció al público con un lenguaje no adecuado para que no dejaran transgredir sus derechos, con expresiones tales como “defiendan sus derechos a **toda costa** contra la avanzada autoritaria de la oligarquía terrateniente”, originando todo lo anterior reacciones

⁴¹ Este delito está tipificado en el Código Penal con el siguiente lenguaje: “El que públicamente incite a otro u otros a la comisión de un determinado delito o género de delitos, incurrirá en arresto de tres (3) meses a tres (3) años” Pie de página No. 3 Caso Hipotético

⁴² Hechos del caso, párr. 19

⁴³ Hechos del Caso Párr. 18.

agresivas en muchas personas, que enardecidas por las mismas iniciaron varios disturbios perturbando no sólo la paz, el orden público y la seguridad nacional, sino poniendo también en riesgo los bienes jurídicos protegidos por el Estado.

47. Chirilagua manifiesta en relación al delito de difamación⁴⁴, que al igual que en los otros procesos penales llevados a cabo, consta de elementos fácticos suficientes que demuestran que efectivamente sí se cometieron al interior del Estado conductas vulneradoras de bienes jurídicos tutelados por el ordenamiento penal, siendo necesaria la sanción impuesta por la comisión la conducta descrita en el respectivo tipo penal. Así, las dos emisoras hicieron pública una información que se refería a varios grupos creados en la red social de Facebook, los cuales tenían un contenido agresivo tales como “Los que odiamos, repudiamos y aborrecemos a Atilio Escalante ó Yo también **quiero que se muera** Atilio Escalante”⁴⁵. Bajo ninguna óptica, el Estado reprocha la publicación e información relacionada con la existencia de tales grupos, lo que reprocha, imputa y considera un ejercicio abusivo del derecho a la libertad de expresión es la conducta permisiva de la emisora de aceptar y transmitir al aire las llamadas en las cuales se imputaban hechos ofensivos al Sr. Atilio Escalante, exponiéndolo así al desprecio público y transgrediendo de esa manera un bien jurídico tutelado internacionalmente que es la dignidad.

48. El Sr. William Garra, quien se desempeñaba como locutor e imitador de la emisora Radical Radio, constantemente ridiculizaba al Sr. Atilio Escalante a través del personaje “Fatilio Estafante”, señalándolo de feudal, bueno para nada, voraz y corrupto. En este caso en particular es necesario manifestar el Sr. Garra con sus expresiones y comentarios atacó directamente la dignidad y reputación del Sr. Escalante, eran palabras ofensivas y despectivas que transgredieron la dignidad y traspasaron ese margen de lo público y tolerante a lo íntimo y personal. Es diferente que un periodista lance imputaciones contra alguien, a que lo haga una persona del común, debido que un periodista consta de elementos como publicidad nacional, legitimidad de la información, libertad de expresión, comunicación, entre otros, que conllevan a que sus imputaciones tengan mayor valor que el de cualquier otra persona, llevando esto a crear desprecio público y ofensas al honor o reputación de un sujeto que en este caso es el Sr. Atilio Escalante. Siendo así completamente legítima por parte del Estado y ajustada a derecho la sanción impuesta por la comisión del delito de difamación en contra del Sr. Garra.

⁴⁴ El delito de difamación está tipificado en el Código Penal de la siguiente manera: “El que comunicándose con varias personas reunidas o separadas, hubiere imputado a algún individuo un hecho determinado capaz de exponerlo al desprecio o al odio público, u ofensivo a su honor o reputación, será castigado con prisión de tres a dieciocho meses. Si el delito se cometiere en documento público o con escritos, dibujos divulgados o expuestos al público, o con otros medios de publicidad, la pena será de seis a veinticuatro meses de prisión” Pie de Página No 4 Caso Hipotético.

⁴⁵ Pie de página No2. Caso Hipotético

49. El Estado manifiesta que en ningún momento el tipo penal de difamación constituye un ejercicio restrictivo abusivo del poder punitivo del Estado⁴⁶ y que al igual que las anteriores condenas, son sanciones compatibles con la Convención, toda vez que la Corte Interamericana ha recalcado que “la libertad de expresión puede estar sujeta a restricciones⁴⁷, en particular cuando interfiere con otros derechos garantizados por la Convención⁴⁸. El Estado busca crear en sus asociados el respeto de todas las personas, exigiendo sobre cualquier cosa la igualdad y la dignidad de estas, imponiendo como consecuencia de una transgresión a cualquiera de esos bienes una sanción penal, la cual es completamente compatible con lo dispuesto en la Convención que en su artículo 13. 2 prevé la posibilidad de exigir responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo del derecho.

50. La conducta de Melanie Pereira, Francis Hoffman y William Garra sobrepasó los límites de su derecho a la libertad de expresión debido que, como periodista el deber está en informar, opinar y criticar pero siempre respetando los derechos fundamentales y los derechos humanos de todas las personas Chirilaguense, en particular del Sr. Atilio Escalante. Una emisora que respeta los derechos fundamentales de las personas no permite, no incita y no alienta en sus programas radiales, a que sus oyentes llamen a repudiar a otras personas utilizando mensajes obscenos, tal y como sucedió cuando permitían llamadas de personas demostrando su total acuerdo con unos grupos de red social. Si esta emisora hubiera salvaguardado el derecho a la dignidad del Sr. Atilio Escalante en ningún momento hubiera permitido que al aire contestaran llamadas donde se manejaban mensajes totalmente transgresores del honor y de la dignidad humana de este.

51. En cuanto al delito de homicidio agravado por el cual fue condenado el Sr. William Garra, Chirilagua manifiesta que la vida, es el principal bien jurídico que el Estado protege, la vida es la garantía de la convivencia, la libertad, la paz y demás condiciones humanas, por lo que es un deber Estatal que le asiste a Chirilagua salvaguardarla. Desde esta perspectiva la asistencia para hacer defender la vida, cuando por medio de situaciones de hecho se trata de ofuscar, es completamente viable y meritoria.

⁴⁶ Caso *Kimel*, párr. 76

⁴⁷ La Colegiación Obligatoria de Periodistas (arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85, supra nota 39, párr. 36. Ver también, Caso *Herrera Ulloa Vs. Costa Rica*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 120 y Caso *Perozo y otros*, párr. 117.

⁴⁸ Caso *Kimel Vs. Argentina*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008. Serie C No. 177, párr. 56 y Caso *Apitz Barbera y otros* (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 131.

52. La condena al Sr. William Garra, se impuso por la función que corresponde a la pena en el Derecho Penal propio de nuestro Estado Constitucional. Con la progresiva aparición del Estado social y con este el del Estado Constitucional de Derecho, tal cual es Chirilagua, atendiendo a la necesidad de intervención para tomar partido en el juego social con el objetivo de garantizar los fines y funciones de los asociados, se acentuó la misión de lucha contra la delincuencia y las vías de hecho. Desde esta perspectiva asumimos la pena como atención a la función de prevención especial.

53. La función del Derecho penal para el Estado de Chirilagua se manifiesta en la función de la pena, pero no se agota en ello. Nuestro Derecho Penal Interno no sólo se integra de las normas que prevén penas o medidas (normas secundarias), sino también de las normas que prohíben los delitos a los ciudadanos (normas primaria). Por eso al prohibir los delitos, las normas primarias perseguirán motivar al ciudadano para que no delinca, en lo que deberán respetar ciertos límites que la doctrina penal tiene en cuenta al exigir determinados requisitos mínimos en el concepto de delito y en particular en la teoría de la antijuridicidad como infracción de la norma (primaria). Desde esta perspectiva entonces la teoría del delito en el Derecho penal de un Estado social y democrático de Derecho como es nuestro caso, se rige por *El principio de exclusiva protección de bienes jurídicos* el cual como Estado nos obliga a concebir el delito como un ataque a un bien jurídico-penal, cuando dicho ataque no esté justificado por la necesidad de salvaguardia de otro bien jurídico prevalente. Para nosotros el principio de culpabilidad (en sentido amplio) exige que un ataque pueda *imputarse objetiva, subjetiva y personalmente a su autor en determinadas condiciones*. Y finalmente, el carácter de última ratio del Derecho penal condiciona la punibilidad del hecho a que este manifieste una suficiente gravedad y necesidad de pena, tal como ocurre en los supuestos fácticos del presente caso. Estos son los elementos que trata de articular nuestro sistema de la teoría del delito, sistema no sólo dotado, en cuanto tal, de valor científico y práctico, sino también legítimo en la medida en que es el resultado de una evolución que ha ido recogiendo las exigencias que la concepción del Estado dominante en nuestro ámbito de cultura impone al Derecho penal.

54. El principio de culpabilidad (en sentido amplio), el cual permitió una imputación objetiva, subjetiva y personalmente a William Garra por las muertes ocurridas el día 3 de Marzo de 2008, se aplicó atendiendo la Política Criminal de nuestro Estado, conllevándonos ello a acceder a la figura de la Comunicabilidad Penal de Circunstancias, dado que nuestro sistema, *“puede optar por cualquiera de las soluciones propuestas en la doctrina y la dogmática Penal para defender y garantizar los Derechos y Deberes fundamentales de la Colectividad”*.

55. Al Sr. William Garra no se le imputó la conducta en calidad de autor directo o material de la conducta punible propiamente dicha, sino que en viabilidad a la determinación que este hizo desde la radio, asumió el rango de determinador de la conducta establecida. El comportamiento del Sr. Garra encaja en la descripción que se hace de la determinación y no de la autoría. Es menester que el determinador, tal como lo ha dicho la doctrina penal internacional desde antaño, es la persona que mediante instigación, mandato, inducción, consejo, coacción orden, convenio o cualquier medio idóneo, logra que otra realice material y directamente conductas de acción o de omisión descrita en un tipo penal o tipos penales. Siendo admisible en esta figura, la comunicación al partícipe de las circunstancias materiales del hecho y las personales del autor que agravan la punibilidad siempre que esté las hubiere conocido. La jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema Colombiana, reconocida como Autoridad en el Sistema Doctrinal Penal Internacional ha establecido al respecto, de manera general: *cuando hay conjugación o unidad de conocimiento y voluntad las consecuencias de las mismas deben cargarse por igual tanto al autor como al determinador*⁴⁹; así mismo el *“determinador responde como partícipe en iguales condiciones punitivas a las del autor material”*⁵⁰; y finalmente, este alto tribunal que sirve como soporte doctrinal auxiliar para efectos de Derecho Penal Comparado, en concreto, estableció que para quien *“... la determinación lo fue para cometer un punible de homicidio bajo la concurrencia de esa específica causal de incremento punitivo siendo consecuencia de ello que la pena prevista para el instigador deba en abstracto ser la misma deducida para el ejecutor material de la conducta...”*

⁵¹. Conforme al criterio antes expuesto, fue condenado el Sr. Garra como “determinador”, siendo obvio que actuó como “partícipe” por lo que se le trasladaron las circunstancias que llevaron a los “otros” a quitarle la vida a las demás personas, colocándolo como imputado del delito de homicidio agravado.

56. No puede jamás interpretarse frente a la Comunidad Internacional la actuación de Chirilagua en los procesos penales, como un injusto régimen opresor, vulnerador de las garantías fundamentales; no es admisible, en razón a qué y para todos los efectos el Estado de Chirilagua manifestó si la fuerza, pero una fuerza que se materializa en un *dominio legítimo* que determina la capacidad de utilizar la fuerza para establecer un orden justo que garantizase los principios y fines que se han establecido en pro de la protección y efectividad de derechos y deberes como principal fin Constitucional; tal como lo concreta el Artículo 2 de la CADH cuanto a los deberes de los Estados y los derechos protegidos. La actuación de

⁴⁹ Corte Suprema de Justicia de Colombia, Tribunal de Casación, 10 de Junio de 1993, M.P. Gustavo Gómez Velásquez, radicación 7669.

⁵⁰ Ibid., Corte Suprema de Justicia de Colombia, casación 29 de Octubre de 1993, M.P. Jorge Enrique Valencia Martínez, radicación 7644; casación 15 de Junio de 2000, M.P. Nilson Pinilla, radicación 12.372.

⁵¹ Ibid., Corte Suprema de Justicia de Colombia, casación de 6 de Noviembre de 2001, M.P. Carlos Augusto Gálvez Argote, radicación 14.524.

Chirilagua siempre se vió motivada para erradicar una patología Constitucional que se tradujo en que sujetos distintos al Estado entraron a hacer uso de la fuerza, con el pretexto de servir a los intereses de la sociedad confrontando radicalmente el poder Estatal en el camino de instaurar un nuevo modelo de sociedad y Estado. Siendo así, el Estado pide a esta Corte eximirlo de cualquier responsabilidad por la violación de los derechos a la libertad de expresión y libertad personal contenidos en el artículo 13 y 7 de la Convención Americana, dado que los fundamentos jurídicos anteriormente expuestos, son suficientes para demostrar que las decisiones y actuaciones de las autoridades Chirilaguenses adoptadas e iniciadas en el presente caso, se ajustaron al derecho interno el cual está acorde a los estándares internacionales en la materia, no vulnerando así derecho fundamental alguno en perjuicio de los peticionarios.

2. EL ESTADO DE CHIRILAGUA NO VULNERÓ EL DERECHO A LA PROTECCION JUDICIAL Y LAS GARANTIAS JUDICALES CONSAGRADO EN LOS ARTICULOS 8 Y 25 DE LA CADH.

57. Es bien sabido por el Estado que los anteriores derechos son garantías que constituyen uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino de todo Estado de Derecho en una sociedad democrática⁵². La Honorable Corte Interamericana ha sostenido que, los Estados Partes están obligados a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de los derechos humanos (artículo 25)⁵³, los cuales deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8.1), todo ello dentro de la obligación general, a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1.1)⁵⁴. Estableciendo además que para que el Estado cumpla lo dispuesto en ese artículo 25 no basta con que los recursos existan formalmente, sino que es preciso que tengan efectividad en los términos de aquel precepto⁵⁵. Dicha efectividad supone que, además de la existencia formal de los recursos, estos den resultados o respuestas a las violaciones de derechos reconocidos, ya sea en la Convención, la Constitución o la ley⁵⁶.

⁵² Caso López Álvarez, párr. 138; Caso Palamara Iribarne, párr. 184; Caso Acosta Calderón, párr. 93; y Caso Beldeon García, párr. 144.

⁵³ Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez, párr. 91; Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”), párr. 69, y Caso Kwas Fernández Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009 Serie C No. 196, párr. 110.

⁵⁴ Caso Velásquez Rodríguez, párr. 91; Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2009. Serie C No. 202, párr. 122, y Caso Yvon Neptune, párr. 77.

⁵⁵ Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Excepción Preliminar. Sentencia de 30 de noviembre de 2005. Serie C No. 139, párr. 4; Caso Eschery y otros, párr. 196.

⁵⁶ Caso Tribunal Constitucional Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71, párr. 90; Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”), párr. 69, y Caso Bayami, párr. 102.

58. En el caso sub judice se llevaron a cabo distintos procesos judiciales de carácter penal y civil, dentro de los cuales se presentaron varios recursos. En todos esos procesos el Estado, garantizó un sistema eficaz de protección judicial con plena observancia de las garantías procesales a la Sra. Melanie Pereira, el Sr. Francis Hoffman y el Sr. William Garra, lo cual deja sin fundamento alguno la alegada violación de los artículos 8 y 25 de la Convención.

59. De los supuestos fácticos se evidencia que dentro del ordenamiento jurídico del Estado existen recursos judiciales efectivos para la determinación de los derechos⁵⁷, dos de estos recursos (acción de amparo y recurso de apelación), fueron interpuestos por los presuntamente afectados, estima Chirilagua que el recurso de amparo es un recurso idóneo para proteger la situación jurídica infringida en el presente caso, ya que este es aplicable a los actos de autoridad que implican una amenaza, restricción o violación a los derechos protegidos, produciendo así el resultado para lo cual fue concebido, es igualmente efectivo el recurso de apelación por cuanto conlleva necesariamente a una revisión del fondo de la decisión recurrida por parte de un juez de superior jerarquía e independiente de aquel que adoptó la decisión inicial. Los anteriores recursos no fueron fallados a favor de las presuntas víctimas, por lo que estos pretenden hacer creer que a raíz de este hecho, no se contó con el derecho de un recurso efectivo y eficaz contenido en el artículo 25 de la Convención. Al respecto, el Estado enfatiza que la protección judicial no comporta el derecho a tener la razón, sino el derecho de acceder e interponer un recurso sencillo y rápido que permita alcanzar, para cada caso, la protección judicial requerida⁵⁸, de tal manera que la eficacia de un recurso es independiente de la resolución o decisión final adoptada en el mismo.

60. En términos de la Corte, no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios⁵⁹, lo cual puede ocurrir, por ejemplo, cuando su inutilidad haya quedado demostrada por la práctica o por cualquier otra situación que configure un cuadro de denegación de justicia⁶⁰, lo anterior se aparta de la realidad jurídica de Chirilagua, toda vez que ha sido un Estado caracterizado por su estabilidad democrática desde su consolidación como Estado autónomo, lo que presupone una fuerte institucionalidad, en cada una de sus ramas del poder público, no siendo la rama judicial la excepción, de tal manera que no existe cuadro fáctico alguno que conlleve a pensar que los recursos previstos en el ordenamiento interno del Estado resulten ilusorios e ineficaces.

⁵⁷ *Ibíd.*, preguntas y repuestas aclaratorias del caso hipotético.

⁵⁸ Caso Tibi contra Ecuador. Párr. 131.

⁵⁹ Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9, párr. 24; Caso Acevedo Buendía y otros ("Cesantes y Jubilados de la Contraloría"), párr. 69, y Caso Reverón Trujillo, párr. 61.

⁶⁰ Caso Ivcher Bronstein, párr. 137; Caso Acevedo Buendía y otros ("Cesantes y Jubilados de la Contraloría"), párr. 69, y Caso Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de febrero de 2006. Serie C No. 144, párr. 213.

61. No es posible inferir que Chirilagua es un estado opresor o instrumentalizador de las Garantías de los ciudadanos. Al analizar la estructura Jurídica de esté, es claro denotar que estamos frente a un Estado donde la legalidad es un valor superior, más allá de ideologías de posturas que pudieran generar baraúndas políticas y vías de hecho al interior de sus territorios. Demarcándose, un profundo respeto a la ley en todas sus formas y acepciones, pues Chirilagua siendo un Estado de Condiciones “*Medio Altas*” tiene como eje central en su desarrollo Constitucional el fin de que ninguna sociedad puede avanzar, si ninguno de sus miembros tiene certidumbre respecto a lo que los otros, incluyendo el gobierno, van a hacer.

62. En cuanto al derecho al debido proceso este es un derecho de gran trascendencia, junto a la protección judicial, ya que protege con efectividad todos los derechos resguardados por la Convención. Las garantías judiciales protegen a las personas en todos los procesos judiciales y busca establecer los derechos y asegurar la adecuada defensa⁶¹. En palabras de la Corte Interamericana, estas son “*entendidas como el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier Estado*”⁶².

63. Chirilagua manifiesta que no se vulneró el derecho contenido en el art. 8 de la CADH por cuanto, siempre garantizó a las víctimas el derecho a ser escuchado, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, para la determinación de los derechos de carácter civil. Así como también garantizó el efectivo cumplimiento del debido proceso legal en la sustanciación de las actuaciones penales llevadas a cabo al interior del Estado, por los argumentos que a continuación expondrá:

64. La Corte ha expresado que toda persona sujeta a un juicio de cualquier naturaleza ante un órgano del Estado deberá contar con la garantía de que dicho órgano sea imparcial y actúe en los términos del procedimiento legalmente previsto para el conocimiento y la resolución del caso que se le somete⁶³. La Corte Europea ha señalado que la imparcialidad tiene aspectos tanto subjetivos como objetivos, a saber:

- I. Primero, el tribunal debe carecer, de una manera subjetiva, de prejuicio personal. Segundo, también debe ser imparcial desde un punto de vista objetivo, es decir, debe ofrecer garantías suficientes para que no haya duda legítima al respecto. Bajo el análisis objetivo, se debe determinar si, aparte del comportamiento personal de los jueces, hay hechos averiguables que podrán suscitar dudas respecto de su imparcialidad. En este sentido, hasta las

⁶¹ Corte IDH. OC-9/87, párr. 27-28. O'DONNEL, et al. Derecho internacional de los derechos humanos, (...), Pág. 349.

⁶² Caso Baena Ricardo y otros v. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencias de 2 de febrero de 2001. Serie C No 72, para. 124; Caso Ivcher Bronstein vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencias de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, párr. 102.

⁶³ Caso Ivcher Bronstein, párr. 112; Caso del Tribunal Constitucional. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71, párr. 77; Caso Castillo Petrucci y otros, párr. 130-131; Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9, párr. 20; y El Hábeas Corpus Bajo Suspensión de Garantías, párr. 30.

apariencias podrán tener cierta importancia. Lo que está en juego es la confianza que deben inspirar los tribunales a los ciudadanos en una sociedad democrática y, sobre todo, en las partes del caso⁶⁴.

65. Chirilagua manifiesta que garantizó el derecho a ser oído por un juez o tribunal imparcial, desvirtuando toda vulneración del mismo, puesto que no existe prueba ni hecho alguno que demuestre que los jueces y tribunales encargados de tramitar los procesos al interior del Estado no contaron con la objetividad necesaria para resolver los juicios que se llevaron a cabo.

66. Es menester señalar que todos los procesos fueron resueltos dentro de un plazo razonable. La acción de amparo interpuesta por la Sra. Melanie Pereira y el Sr. Byron Dale el día 30 de Abril de 2008, fue resuelta en primera instancia 15 de Mayo del mismo año y la Corte de Apelaciones confirmó el fallo del A-quo el 2 de Junio de 2008. En el proceso penal de Hurto de Bienes del Estado, el Ministerio Público acusó a Melanie Pereira, Francis Hoffman el 4 de Julio de 2008, fue proferida sentencia de primera instancia el 8 de noviembre del mismo año y esta fue ratificada por el Tribunal de Apelaciones el día 25 de Noviembre del mismo año. Respecto del proceso de instigación a delinquir y difamación en contra de Melanie Pereira y Francis H., el Ministerio Publico los acusó el 20 de julio de 2008 y el 15 de Septiembre del mismo año el Tercer Juzgado Criminal de Delitos los condenó como responsables de dichas conductas, la apelación fue resuelta por el Tribunal el día 1 de Octubre de 2008. En relación con el proceso penal en contra de William Garra, el Ministerio Público presentó acusación por los delitos de difamación, instigación a delinquir y homicidio, el 25 de Julio del 2008 y el 23 de Noviembre del mismo año, el Tercer Juzgado Criminal lo condenó responsable de dichas conductas, la apelación fue confirmada el día 1 de Diciembre de 2008. Por lo anterior queda demostrado que las autoridades chirilaguenses actuaron con absoluta diligencia y celeridad para resolver de manera definitiva actuaciones judiciales en las cuales estaban en disputa derechos fundamentales tanto de los procesados como de las víctimas, ya que desde la imputación de los cargos hasta los fallos de sentencia definitiva no transcurrieron más de 5 meses.

67. Así mismo, las presuntas víctimas sí contaron con el derecho a recurrir el fallo ante juez o Tribunal superior contenido en el artículo 8.2.h. de la Convención Americana, el cual dispone que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, “de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior”. La Corte ha considerado que el derecho de recurrir del

⁶⁴ Corte Europea de Derechos Humanos, Caso de Pabla KY v. Finlandia, 26 de Junio de 2004, párr. 27; y Caso de Morris V Reino Unido 26 de febrero de 2002, párr. 58.

fallo es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica⁶⁵. Como se indicó anteriormente, en todos los procesos llevados a cabo al interior del Estado, las presuntas víctimas tuvieron la oportunidad de ejercer tal derecho, apelando las decisiones de primera instancia proferidas por los jueces de la República, acogiendo lo expresado por la CORIDH en cuanto a que el derecho de interponer un recurso contra un determinado fallo debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiriera la calidad de cosa juzgada⁶⁶. Así, el fallo de primera instancia de la acción de constitucionalidad fue apelado por el Sr. Byron Dale y la Sra. Melanie Pereira⁶⁷. La decisión de primera instancia dentro del proceso penal por el delito de hurto a bienes del estado fue apelada por la Sra. Pereira y el Sr. Hoffman, al igual que la condena proferida en perjuicio de los mismos dentro del proceso llevado a cabo por el delito de instigación a delinquir y difamación; el Sr. Garra por su parte también apeló la decisión proferida el 23 de Noviembre de 2008, mediante la cual se le declaró responsable de la comisión de los delitos de homicidio, instigación a delinquir y difamación. El Estado reconoce que este derecho de recurrir del fallo, consagrado en la Convención, no se satisface con la mera existencia de un órgano de grado superior al que juzgó y condenó al inculcado, ante el que éste tenga o pueda tener acceso, sino que para que haya una verdadera revisión de la sentencia, en el sentido requerido por la Convención, es preciso que el tribunal superior reúna las características jurisdiccionales que lo legitiman para conocer del caso concreto. De esta manera y conforme a lo anteriormente expuesto todos y cada uno de los jueces o Tribunales superiores que conocieron de tales recursos fueron completamente competentes conforme a la estructura jerárquica de nuestro ordenamiento, otorgándoles competencia para decidir válidamente sobre los mismos apegados única y exclusivamente a la ley, revisando dada la naturaleza del recurso el fondo de cada una de las decisiones adoptadas por los jueces de primeras instancias.

68. Chirilagua garantizó el principio de inocencia de los ciudadanos Francis Hoffman, Melani Pereira y William Garra, la CORIDH ha señalado que el artículo 8.2 de la Convención exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal⁶⁸. En este sentido, la Corte ha afirmado que el principio de presunción de inocencia subyace el propósito de las garantías judiciales, al afirmar la idea de que una persona es inocente hasta que su

⁶⁵ *Ibíd.*, Caso Herrera Ulloa, párr. 157 y 158.

⁶⁶ *Ibíd.*, Caso Herrera Ulloa, 157.

⁶⁷ *Ibíd.*, Caso Hipotético, Párr. 35.

⁶⁸ Caso Ricardo Canese, párr. 153; Caso Cantoral Benavides, párr. 120.

culpabilidad sea demostrada⁶⁹. Es un derecho que implica además que el acusado no deba demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el *onus probandi* corresponde a quien acusa⁷⁰. Como se encuentra probado en los supuestos fácticos del presente caso, se condenó a las presuntas víctimas como consecuencia de la declaración de culpabilidad en la comisión de los distintos delitos, solo cuando esta fue establecida en sentencia; decisión cuyo fundamento fueron las pruebas, acusaciones y argumentos presentados por el Ministerio Público en calidad de ente acusador, respetando de esa manera los principios generales del derecho universalmente reconocidos⁷¹.

69. Finalmente no existe tampoco prueba ni hecho alguno que indique que a las presuntas víctimas se les vulneró al interior del Estado de Chirilagua, el derecho a ejercer una debida defensa, por lo que queda suficientemente claro y probado que el Estado garantizó plenamente las garantías judiciales contenidas en el art. 8 de la Convención al igual que el derecho a una efectiva protección judicial por todos los argumentos anteriormente expuestos, de manera tal que el Estado solicita a esta Corte eximirlo de cualquier responsabilidad respecto a la vulneración del artículo 8 y 25 de la CADH en perjuicio del Sr. Francis Hoffman, Melanie Pereira y William Garra.

3. EL ESTADO DE CHIRILAGUA NO VULNERÓ EL DERECHO A LA PROPIEDAD CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA CADH.

70. El art. 21 CADH reconoce el derecho a la propiedad privada. De acuerdo a esta norma, el derecho a la propiedad consagrado en la Convención garantiza el libre ejercicio de los atributos de ésta, entendidos como el derecho de disponer de bienes en cualquier forma legal, poseerlos, usarlos e impedir que cualquier otra persona interfiera en el goce de ese derecho.

71. El derecho a la propiedad abarca todos los derechos patrimoniales de una persona, esto es, los que recaen tanto sobre bienes materiales como sobre bienes inmateriales susceptibles de valor⁷².

72. Como la Corte Interamericana lo ha definido, los “bienes” son aquellas cosas materiales apropiables, así como todo derecho que pueda formar parte del patrimonio de una persona dicho concepto comprende todos los muebles e inmuebles, los elementos corporales e incorporeales y cualquier otro objeto inmaterial susceptible de valor⁷³.

⁶⁹ Ibid., Caso Ricardo Canese, párr. 153; Caso Suarez Rosero, párr. 77.

⁷⁰ Ibid., Caso Ricardo Canese, párr. 154.

⁷¹ Caso Tibi, párr. 180; Caso Suárez Rosero, párr. 77, y Caso Acosta Calderón, párr. 111.

⁷² Demanda de la CIDH en el caso de *Humberto Antonio Palamara Iribarne* contra la República de Chile. Párr. 97.

⁷³ Corte IDH., Caso *Ivcher Bronstein*. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, párr. 122.

73. Melanie Pereira y Byron Dale, alegan que el cierre de la concesión otorgada a la emisora Radical Radio vulneró su derecho a la propiedad. En el presente caso no existe argumento jurídico alguno que permita declarar responsable a Chirilagua por la violación del art. 21 de la Convención en perjuicio de aquellos. En primer lugar, el espectro radioeléctrico, es un bien de uso público sobre el cual ninguna persona en particular puede ejercer derecho de propiedad, lo que el Estado concede por un determinado tiempo es el uso y goce del mismo. Chirilagua reconoce que el derecho al uso y goce del espectro radioeléctrico, concedido a Melanie Pereira y Byron Dale es un derecho de carácter patrimonial amparado por el art. 21, sin embargo es menester señalar que este es un derecho en primer lugar temporal, puesto que las concesiones que se otorgan en Chirilagua son por el término de 30 años y en segundo lugar su vigencia está supeditada al cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley Orgánica de Telecomunicaciones, por lo que es un derecho cuya existencia y vigencia depende del cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha ley, de tal manera que si estos no se cumplen, el derechos no se adquiere o simplemente deja de existir, sin que exista vulneración alguna del derecho a la propiedad. Así en el presente caso Radical Radio, emisora de propiedad del Sr. Byron Dale y Melanie Pereira a la cual le fue concedida concesión sobre el espectro radioeléctrico, incumplía lo dispuesto en el art. 92 de la ley Orgánica de Telecomunicaciones. Por Esto no es posible alegar una vulneración del derecho a la propiedad cuando el derecho mismo deja de existir por razones consagradas en una ley interna que no asoma vulneración alguna respecto de los estándares del derecho internacional de los derechos humanos, que no establece limitaciones arbitrarias sino mecanismos de regulación y control de un recurso escaso cuya vigilancia y dominio está en cabeza del Estado. En razón de lo expuesto, Chirilagua solicita a esta H. Corte eximirlo de cualquier responsabilidad sobre la violación del derecho a la propiedad contenido en el art. 21 CADH por cuanto no existe situación fáctica y jurídica que permita deducir tal vulneración.

4. EL ESTADO DE CHIRILAGUA NO VULNERÓ EL DERECHO A LA IGUALDAD ANTE LA LEY CONTENIDO EN EL ARTICULO 24 DE LA CADH

74. En función del reconocimiento de la igualdad ante la ley se prohíbe todo tratamiento discriminatorio de origen legal. Al respecto la Corte IDH ha sostenido: *“La noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación de inferioridad. No es admisible crear diferencias de tratamiento entre seres humanos que no se correspondan con su única e idéntica naturaleza”*⁷⁴.

75. Los representantes legales de las emisoras Radical Radio y Radio Su-Versión alegan que el Estado de Chirilagua ha violado su derecho a la Igualdad ante la ley. Sin embargo las medidas tomadas por el Estado respondieron estrictamente a la aplicación de la normatividad vigente en Chirilagua- que como se ha expresado reiteradamente está ajustada a la Convención- por los hechos acaecidos sin tomar en consideración trato discriminatorio alguno. La COFERETEL luego de una revisión a las concesiones de todas las emisoras del Estado, encontró que Radical Radio no cumple con los requisitos del Art. 92 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, por tal motivo se ordenó la cancelación de la concesión y también se determinó que Radio Su-Versión nunca obtuvo licencia para el uso del espectro radioeléctrico y por la tanto, esta entidad ordenó inmediatamente el cierre de la emisora. De igual manera la COFERETEL encontró irregularidades en 40 emisoras de radio en todo el Estado porque no cumplían los requisitos de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y se ordenó el cierre de las mismas.

76. La Corte Europea ha determinado que sólo es discriminatoria una distinción cuando "carece de justificación objetiva y razonable"⁷⁵, en el caso específico, la COFERETEL cuenta con justificaciones objetivas y razonables establecidas por la Ley Orgánica de Telecomunicaciones que establece ciertos requisitos que deben cumplir las emisoras; de no cumplirse estos requisitos, la COFERETEL está facultada y es además su obligación ordenar el cierre, cancelar las concesiones o confiscar los equipos de las emisoras radiales a que haya lugar.

⁷⁴ Opinión Consultiva 4/84; 19 de enero de 1984.

⁷⁵ Eur. Court H.R., case "relating to certain aspects of the laws on the use of languages in education in Belgium" [merits], judgement of 23-VII- 1968, pág. 34

77. Como se puede corroborar el Estado no ha aplicado ninguna medida arbitraria que socave el derecho a la igualdad establecida en el artículo 24 de la CADH. Por este motivo solicita a la Corte que no declare responsabilidad internacional de Chirilagua por este derecho.

VII. PETITORIO

78. El Estado de Chirilagua solicita a esta Corte declararse incompetente para conocer de las violaciones de los derechos contenidos en la Convención en perjuicio de Radical radio y Radio Su Versión por falta de competencia razón persona; así mismo declararse incompetente para conocer de las violaciones de la libertad de expresión (art.13 CADH), derecho a la propiedad (art.21 CADH), derecho a las garantías judiciales (art.8CADH) y derecho a igualdad ante la ley (art.24 CADH), en perjuicio de William Garra y Francis Hoffman y por otra parte, derecho a la propiedad (art.21 CADH), derecho a las garantías judiciales (art.8 CADH) y derecho de igualdad ante la ley (art.24 CADH) en perjuicio de Melanie Pereira y Byron Dale por falta de agotamiento de los recursos internos.

79. En su defecto, se solicita eximir al Estado de cualquier responsabilidad por la violación de los derechos contenidos en los artículos 7, 8, 13, 21, 24, 25 en perjuicio de Melanie Pereira Peroni, Francis Hoffman, Byron Dale y William Garra, por los fundamentos jurídicos anteriormente expuestos.